



Cinco años de ‘NextGen’ dejan a España con 61.700 millones sin usar

Moncloa renunció al 74% de los créditos en condiciones ventajosas del plan

Lidia Montes BRUSELAS.

El plan de Recuperación encara los meses de recta final a las puertas de las elecciones en España, convocadas para el próximo 29 de noviembre. El despliegue del programa de salida de la pandemia ha servido como estímulo a la economía española, que ha mantenido el pulso gracias a los fondos de Bruselas, según reconocía la propia Comisión Europea. Sin embargo, en el transcurso de estos cinco años dejan una dotación sustancialmente inferior a la que se diseñó en un inicio. España ha renunciado a 61.700 millones de euros en préstamos, ha perdido 1.400 millones de euros en compromisos no cumplidos, ha retrasado los plazos de ejecución del plan por el bloqueo político y ha experimentado importantes cuellos de botella en la traslación de la financiación de Bruselas a la economía real.

El programa español estaba concebido con una dotación inicial de 140.000 millones de euros distribuidos a partes iguales entre transferencias a fondo perdido y préstamos en condiciones ventajosas. La revisión del plan en 2023 amplió esa dotación hasta 163.000 millones con un reparto equitativo en fondos y créditos, 79.800 millones y 83.200 millones, respectivamente. Sin embargo, España solo ha solicitado finalmente 101.300 millones del total. Parte de la financiación está todavía pendiente de esos 26.000 millones del séptimo y último pago en proceso de evaluación.

Las promesas del Gobierno de aprovechar al completo los fondos *Next Generation* se quedaban por el camino. Su estrategia, desde un inicio, hizo tambalear tal intención. Mientras Italia, el mayor receptor de financiación, arrancaba su plan pidiendo créditos y transferencias en paralelo, España avanzaba en la solicitud con las transferencias. No hacía lo mismo con los créditos.

Precisamente, los préstamos se presentaban en condiciones más ventajosas que las del mercado para que los países pudieran aprovechar la financiación. El Ejecutivo español no reclamó los préstamos hasta el quinto desembolso. El cambio en las condiciones, finalmente, ha propiciado que España renunciara a buena parte de los créditos. Concretamente, al 74% de los préstamos asignados, unos 61.700 millones. En paralelo, ha solicitado cerca de 21.500 millones en préstamos.

El cierre financiero no resuelve, sin embargo, otra de las grandes cuestiones del programa de salida de la pandemia: cuánto del extraor-



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

dinario volumen de recursos se ha traducido en inversión efectiva. Los pagos de Bruselas, la ejecución de las administraciones públicas y el dinero que llega a las empresas y hogares han registrado desfases temporales que complican la absorción de fondos y, en consecuencia, la evaluación de su impacto.

Pagos parciales

La dotación del plan no ha sido el único escollo. La dificultad para llegar a acuerdos con la compleja aritmética parlamentaria que caracterizó al Ejecutivo de Sánchez ha de-

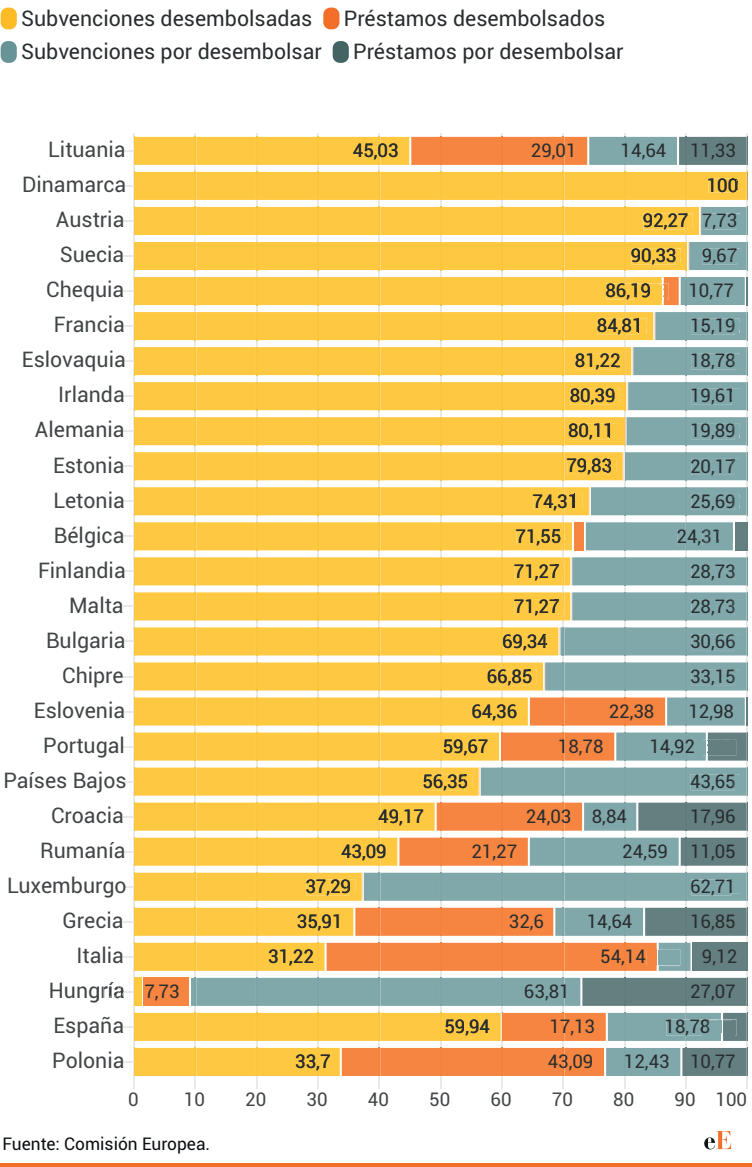
Bruselas ha congelado 1.400 millones por los compromisos no cumplidos

jado por el camino la reforma del impuesto al diésel o la de la temporalidad de los interinos. España ha perdido unos 1.400 millones de euros en compromisos no cumplidos con Bruselas y que formaban parte del programa.

En el sexto tramo, Bruselas retuvo 537 millones de euros por la falta de cumplimiento de tres hitos: la formación profesional bilingüe, los proyectos para personas vulnerables y emprendedores y el despliegue de servicios de teleasistencia. Anteriormente, ya en el quinto tramo, la Comisión Europea suspen-

Asignación total de los Planes de Recuperación

Porcentaje desembolsado y pendiente de desembolso, a 1/10/2026



Fuente: Comisión Europea.

dió 1.100 millones a España por no cumplir con la digitalización de las entidades locales, la falta de solución a la temporalidad de los interinos o el impuesto al diésel.

Si, finalmente, el Ejecutivo comunitario devolvió a España 265 millones en el marco del sexto pago fue por dar por cumplidos dos hitos: el de la digitalización de las entidades locales y regionales y la reforma fiscal vinculada ese impuesto al diésel que nunca llegó a salir adelante y que el Gobierno justificó con otros datos de recaudación.

Cierre de agosto marcaba el punto final para que las capitales pudieran cumplir con los compromisos pactados con Bruselas. Con todos esos deberes pendientes y objetivos por cumplir, España ha perdido unos 1.400 millones en financiación que Bruselas había retenido. Está por ver qué pasa con el séptimo pago.

La regulación del plan de Recuperación específica que agosto era la fecha límite de cumplimiento, pero el Gobierno aún quiere sacar ade-

Los aplazamientos y los cuellos de botella dificultan la llegada de fondos a la economía real

lante el decreto de los centros de datos antes de terminar noviembre y que compute para el séptimo pago. Un movimiento que la regulación no permite y que deja en el aire que Bruselas vaya a entregar a Madrid la financiación asociada a este compromiso.

Retraso

Precisamente el calendario ha sido uno de los factores que ha pesado en el cómputo final. La difícil aritmética parlamentaria retrasaba los plazos previstos para las solicitudes de pago. Las negociaciones en Madrid dilataban los plazos respecto a Bruselas y las peticiones de pago empezaron a llegar con hasta un año de retraso.

Si la reforma de la fiscalidad del diésel, ningún hito ha sacudido tanto los plazos como la reforma del subsidio por desempleo que retrasó hasta seis meses la aprobación de Bruselas del cuarto pago y sus 10.000 millones, con amplia flexibilidad frente al plazo de dos meses del que dispone la Comisión Europea para evaluar un pago.

Este último tramo será vital para España: casi 26.000 millones de euros, el mayor desembolso hasta la fecha para nuestro país, asociado a 148 hitos y objetivos que se corresponden con el 30% de los compromisos de todo el plan según la última revisión presentada por Moncloa. Tras renunciar a los préstamos el balance de España quedará también definido por la capacidad de España de traducir los fondos en reformas e inversiones duraderas.